LA CORTE CONSTITUCIONAL REITERÓ QUE LAS CONVENCIONES COLECTIVAS SON FUENTE DE DERECHO Y, POR ENDE, DEBEN SER INTERPRETADAS CONFORME A LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES. EN EL CASO CONCRETO, AL NO HABERSE APLICADO EL PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD EN MATERIA LABORAL, SE CONCEDIÓ LA TUTELA DEJANDO SIN EFECTOS UNA SENTENCIA QUE NO RECONOCÍA EL CUMPLIMIENTO DE LA EDAD PARA TENER DERECHO A LA PENSIÓN

V. EXPEDIENTE T-6909272 - SENTENCIA SU-267/19 (junio 12)

M.P. Alberto Rojas Ríos

La Sala Plena de la Corte Constitucional revisó las sentencias pronunciadas en el trámite de la acción de tutela formulada por León Darío Metaute Salazar contra la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Antioquia, Sala Segunda de Descongestión Laboral, autoridades que profirieron decisiones el veinticuatro (24) de enero de 2018 y el treinta (30) de junio de 2011, respectivamente, dentro del proceso laboral ordinario que promovió el accionante contra el Departamento de Antioquia.

La Corte Constitucional verificó si las decisiones indicadas habían vulnerado el derecho fundamental al debido proceso del señor Metaute Salazar, al incurrir presuntamente en los defectos *sustantivo* y *desconocimiento del precedente*, conforme a los requisitos específicos de procedibilidad de las acciones de tutela contra providencias judiciales.

Al efecto, la Sala Plena reiteró que, de conformidad a las sentencias SU-241 de 2015 y SU-113 de 2018, las convenciones colectivas son fuentes de Derecho y, como tales, deben ser interpretadas conforme a los principios constitucionales. De manera que, si existieren dudas interpretativas frente a éstas, los jueces deben adoptar una decisión conforme al principio de favorabilidad laboral reconocido en el artículo 53 Superior.

Así mismo, abordó el análisis de los textos convencionales invocados por el accionante y se concluyó que, contrario a lo sostenido por las autoridades accionadas, éstos admiten, al menos dos lecturas posibles y totalmente razonables, siendo una de ellas, que el demandante podía cumplir la edad requerida para obtener el reconocimiento de la pensión con posterioridad a la finalización del vínculo.

Por lo tanto, resultaba vulneratorio de los derechos fundamentales de los trabajadores que se hubiera acogido la interpretación menos favorable para el actor y, más aún, que las providencias objeto de tutela aplicaron el principio de favorabilidad como parámetro para adoptar la decisión correspondiente.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala encontró que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en: (i) un defecto *sustantivo*, al realizar una errónea hermenéutica jurídica y asumir que las convenciones colectivas tenían un sentido unívoco en perjuicio del trabajador; y, (ii) *desconocimiento del precedente*, debido a que adoptaron una decisión en contravía de los lineamientos acogidos por la Corte Constitucional, especialmente, en la sentencia SU-241 de 2015.

Por lo anterior, se decidió revocar las providencias de tutela proferidas en primera y segunda instancia, por las Salas de Casación Penal y Civil de la Corte Suprema de Justicia, y amparar el derecho fundamental al debido proceso del señor León Darío Metaute Salazar. En consecuencia, se dejó sin efectos la decisión adoptada el veinticuatro (24) de enero de 2018 por la Sala de Casación Laboral de esa misma Corporación y se le ordenó expedir una nueva sentencia, en la cual observe el precedente constitucional en relación con el principio de favorabilidad laboral y los demás lineamientos descritos en esta providencia.

4. Aclaración de voto

No obstante compartir la decisión adoptada en esta ocasión, el Magistrado **Antonio José Lizarazo Ocampo** presentará una aclaración de voto relativa a algunas de las consideraciones expuestas en la presenta sentencia.